



**TOCA DE RECLAMACIÓN  
NÚMERO:** REC-298/2019-P-2.

**RECURRENTE:** C.  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, PARTE ACTORA EN  
EL JUICIO DE ORIGEN.

**MAGISTRADO PONENTE:**  
MTRO. RURICO DOMINGUEZ  
MAYO.

**SECRETARIO DE ACUERDOS:**  
LIC. OMAR OSVALDO GÓMEZ  
DOMÍNGUEZ.

**VILLAHERMOSA, TABASCO, SESIÓN ORDINARIA DEL H. PLENO  
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO,  
CORRESPONDIENTE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL  
VEINTE.**

**V I S T O S.-** Para resolver los autos del toca de Reclamación número **REC-298/2019-P-2**, interpuesto por la ciudadana \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, parte actora en el juicio principal, en contra del **auto de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve**, en el cual antes del cierre de instrucción se sobreseyó el juicio, deducido del expediente número **175/2019-S-4**, del índice de la Cuarta Sala Unitaria de este Tribunal y,

### **R E S U L T A N D O**

1. Mediante escrito presentado el día **veinticinco de febrero de dos mil diecinueve**, ante la Oficialía de partes común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, la ciudadana \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la Receptoría de Rentas del Municipio de Nacajuca, Tabasco, de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco; de quien reclamó los siguientes actos:

“EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO CON NUMERO(sic) DE OFICIO \*\*\*\*\*en el expediente \*\*\*\*\* , ORDENADO POR LA DIRECCION(sic) DE RECAUDACION(sic) DE LA SECRETARIA DE PLANEACION(sic) Y FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, constituido por los siguientes actos:

1.- MANDAMIENTO DE EJECUCION,(sic) DESIGNACION(sic) DEL EJECUTOR E INSTRUCCIÓN AL MISMO, signado por el RECEPTOR DE RENTAS DE NACAJUCA, TABASCO, de la Dirección de Recaudación, de la Secretaria de Planeación y Finanzas, de fecha 15 de noviembre de 2017, relacionado con el of(sic): \*\*\*\*\*en el expediente \*\*\*\*\* .

2.- ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, de fecha 28 de noviembre de 2018 practicado por el Notificador ejecutor, de la Receptoría de Rentas de Nacajuca, Dirección de Recaudación, de la Secretaria de Planeación y Finanzas, del Gobierno del Estado de Tabasco, dirigido al suscrito, relacionado en el oficio: \*\*\*\*\*en el expediente \*\*\*\*\* .

3.- CITATORIO.- de fecha 27 de noviembre de 2018, relacionado con el oficio \*\*\*\*\*en el expediente \*\*\*\*\* , generado en el domicilio PLAZA HIDALGO entendida por el notificador actuante.”

2

2. A través del auto emitido el **cuatro de marzo del año dos mil diecinueve**, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a quien tocó conocer del asunto bajo el número de expediente **175/2019-S-4**, admitió en los términos antes señalados la demanda propuesta, ordenando emplazar a la autoridad demanda para que formulara su contestación en el término que marque la Ley.

3. Se tuvo por contestando la demanda a las autoridades demandadas, a través del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en donde se le admitieron las pruebas y se ordenó dar vista a la parte contraria con la contestación de la demanda.

4. Por acuerdo de fecha **diez de septiembre de dos mil diecinueve**, la Cuarta Sala Unitaria tuvo a la parte actora por desahogada la vista dada en el auto citado con anterioridad, y al mismo tiempo la Sala de origen hizo valer la improcedencia y sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción determinó el sobreseimiento del



juicio por improcedente, en términos del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en correlación con diverso 176 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, por no actualizarse la competencia del tribunal para conocer en la etapa procesal sobre la impugnación de los actos, toda vez que las actuaciones del procedimiento administrativo de ejecución todavía no adquieren el carácter de actos definitivos.

5. En contra de la determinación anterior, en fecha **cuatro de octubre de dos mil diecinueve**, la parte actora interpuso recurso de reclamación.

6. Mediante proveído de **dieciocho de octubre de dos mil diecinueve**, el Magistrado Presidente de este tribunal, admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, y ordenó correr traslado a la autoridad demanda, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, asimismo se designó al Magistrado titular de la Segunda Ponencia, para el efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

3

7. En distinto proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por precluido el derecho de la autoridad demandada a manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno al presente recurso de reclamación; de igual forma, en el mismo auto se ordenó turnar el Toca debidamente integrado al Titular de la Primera Ponencia, lo cual se hizo a través del oficio número TJA-SGA-2012/2019, recepcionado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, para el efecto que se formulara el proyecto de sentencia respectivo, por lo que habiéndose formulado el proyecto de resolución, este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, procede a dictar sentencia en los siguientes términos:

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL.** Este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el presente **RECURSO DE RECLAMACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171, fracción XXII, en relación con los diversos 108, 109 y 110, todos de la

Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811, y que entró en vigor al día siguiente.

**SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN.** Es procedente el recurso de reclamación al cumplir con los requisitos establecidos en la fracción I, y último párrafo del artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en virtud que el recurrente se inconforma del auto de fecha **diez de septiembre de dos mil diecinueve**, en el que se sobreseyó el juicio.

Así también se desprende de autos (foja 52 del expediente principal), que el acuerdo recurrido le fue notificado a la accionante el **veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve**, por lo que el término de cinco días hábiles para la interposición del presente recurso que establece el citado artículo 110, transcurrió del uno al siete de octubre<sup>1</sup> de dos mil diecinueve, y el medio de impugnación fue presentado el **cuatro de octubre de dos mil diecinueve**, por lo cual el recurso se interpuso en tiempo.

4

**TERCERO. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO.**

En estricta observancia a los principios procesales de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias, conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, se procede al estudio y resolución del único agravio del recurso de reclamación, hecho valer por la parte demandante, a través del cual medularmente sostiene los siguientes argumentos:

- Que el auto de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, vulnera su garantía de seguridad jurídica contemplada en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la errónea interpretación que hace la Sala respecto al artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, pues a consideración del recurrente, la competencia de este Tribunal no es exclusiva para conocer juicios contra resoluciones definitivas, ya que también puede conocer de

---

<sup>1</sup> Descartándose los días cinco y seis de octubre de dos mil diecinueve, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente.

resoluciones que pongan fin a un procedimiento, hipótesis en la que supuestamente se ubica.

- Que éste último supuesto es aplicable en la especie, ello si se toma en consideración que el acto impugnado consiste, además, en la aplicación de una medida de apremio impuesta por la autoridad responsable del juicio laboral para hacer cumplir coactivamente su requerimiento o determinación, lo cual es un acto definitivo de naturaleza administrativa y distinto al procedimiento administrativo de ejecución.
- Que en todo caso, el acto impugnado se ejecutó sin atender las formalidades esenciales del procedimiento que al efecto prevé la ley de la materia, esto en los términos de la demanda, y que tiene como consecuencia, la afectación en el patrimonio de la actora, sin mediar mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado; por lo cual, en atención al derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto por el numeral 125 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se debe declarar la nulidad de dicho acto.

5

**CUARTO. ANÁLISIS DEL AUTO RECURRIDO.** De conformidad con lo antes relatado, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa determina que los argumentos expuestos en el único agravio vertido por la recurrente resultan por una parte, **infundados** por insuficientes, y por otra, **inoperantes**, los argumentos de agravio expuestos por la recurrente, por las consideraciones siguientes:

En principio, se obtiene del proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que la Magistrada instructora en el juicio de origen **175/2019-S-4**, dio cuenta del escrito presentado el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual la ciudadana \*\*\*\*\* , por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo, demandando la nulidad del mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción del mismo de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de

---

dos mil dieciocho y citatorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el titular de la Receptoría de Rentas del Municipio de Nacajuca, Tabasco, de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

Seguidamente, como se narró en el resultando **3** de este fallo, en el **auto** recurrido de fecha **diez de septiembre de dos mil diecinueve**, la Sala instructora dio cuenta del oficio de contestación a la demanda instaurada en su contra, suscrito por la autoridad demandada, en la cual hizo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento, por tanto la Sala procedió al análisis de las mismas, razón por la cual antes del cierre de instrucción decretó el sobreseimiento del juicio.

Ahora bien, se observa que en el acto impugnado de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, se hizo **exigible** al **Síndico de Hacienda del H.(sic) Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco**, (cargo que en la fecha en la que se emitió el mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo recaía en la persona de la C. \*\*\*\*\*), tal como se advierte del documento original exhibido por la promovente), el cobro de una multa en cantidad total de **\$940.28 (novecientos cuarenta peso 28/100 M.N.)**, determinada por incumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha diecisiete de agosto y quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en el juicio \*\*\*\*\*<sup>2</sup>.

Enseguida, la **Cuarta** Sala Unitaria de este tribunal acordó que el juicio interpuesto por la ciudadana \*\*\*\*\* , **resultó improcedente y en consecuencia se determinó el sobreseimiento del juicio** al sostener, en esencia, que las actuaciones del procedimiento administrativo de ejecución no son susceptibles de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo, por no ser el momento procesal oportuno, ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con el diverso 176(sic) del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la

---

<sup>2</sup> Folio 6 al 8 del expediente principal 472/2019-S-4.

ley de la materia por mandato expreso en su artículo 1, pues se tratan de actuaciones que todavía no adquieren el carácter de ser actos definitivos.

Así las cosas y a fin de resolver la cuestión planteada, se considera pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente y aplicable al presente asunto, el cual establece lo siguiente:

**Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco**

**“Artículo 157.-** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

- I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades;
- II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;
- III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
- IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales estatales;
- V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas locales o municipales;
- VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
- VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a las personas físicas o jurídicas colectivas que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan los derechos del estado;

**VIII.** Las que se dicten en materia de pensiones con cargo al erario estatal o municipal;

**IX.** Las que determinen el actuar de manera unilateral de las autoridades, tratándose de rescisión, terminación anticipada, ejecución de fianzas, interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables señalen expresamente la competencia del Tribunal;

**X.** Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente;

**XI.** Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

**XII.** Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; como en aquellos en que la Ley de la materia establezca que los particulares no gozan de derechos preferentes;

**XIII.** Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos;

**XIV.** Las resoluciones de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco;

**XV.** Las sanciones y demás resoluciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización, en términos de las Leyes aplicables;



**XVI.** Las resoluciones definitivas que determinen la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio Público; peritos; custodios, y miembros de las instituciones policiales del Estado y municipios de Tabasco; y

**XVII.** Las señaladas en ésta y otras leyes como competencia del Tribunal.

**Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.**

El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley.”

(Énfasis añadido)

Del numeral antes transcrito se obtiene que la **competencia** de este tribunal está limitada para conocer de juicios en los que se impugnen resoluciones, actos y/o procedimientos que como requisito *sine qua non* sean **definitivos**, encontrándose dentro de dichos actos, las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando actúen como autoridades, las dictadas por las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, así como las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable.

9

Precisado lo anterior, como ya se adelantó, resultan, por un lado, **infundados** por insuficientes los argumentos vertidos por la actora, en el sentido de que la Sala de origen realizó una inexacta interpretación y aplicación del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco en vigor, pues como se abundó en párrafos previos, a través del juicio de origen, la ciudadana \*\*\*\*\* , por su propio derecho,

10

impugnó los actos consistentes en: 1) mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; 2) acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 3) citatorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitido y levantados por el titular de la Receptoría de Rentas del Municipio de Nacajuca, Tabasco, de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y por el notificador ejecutor adscrito a dicha dependencia, respectivamente, actuaciones a través de las cuales, según se observa, se hizo exigible el cobro de una multa en cantidad total de **\$940.28 (novecientos cuarenta pesos 28/100 M.N.)** determinada por incumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha diecisiete de agosto y quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en el juicio \*\*\*\*\* , siendo tales actuaciones del procedimiento administrativo de ejecución anteriormente descrito, tal como lo afirmó la Sala, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo de origen, esto por no ser el momento procesal oportuno, de conformidad con el **artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, antes transcritos, en relación con el diverso 171 Quater del Código Fiscal del Estado de Tabasco**, de aplicación supletoria a la materia, por así disponerlo el diverso artículo 1 de la ley procesal en cita, precepto último enunciado que es del contenido siguiente:

#### Código Fiscal del Estado de Tabasco

**“Artículo 171 Quater.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material**, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.”

(Énfasis añadido)



Así, conforme a lo ya analizado respecto a lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se obtiene que la **competencia** de este tribunal está limitada para conocer de juicios en los que se impugnen resoluciones, actos y/o procedimientos que como requisito *sine qua non* sean **definitivos**, para lo cual deberá entenderse que se tratan de resoluciones o actos definitivos, cuando estos no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

Por otra parte, del artículo 171 Quater antes transcrito, se desprende que los actos de cobro coactivo (procedimiento administrativo de ejecución) podrán impugnarse a través del recurso administrativo previsto-recurso de revocación, solo hasta que en dicho procedimiento **se publique la convocatoria de remate, dentro de los diez días siguientes a tal evento, salvo que se traten de actos de ejecución sobre bienes inembargables o actos de imposible reparación material, lo que en el caso no se actualiza.**

11

Respecto al tema, es preciso señalar que por criterio de nuestro máximo tribunal, de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 185 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, se ha sostenido que los actos del procedimiento administrativo de ejecución no revisten de los requisitos para considerarse como actos definitivos que determinen la procedencia del juicio de nulidad, ya que se tratan de actos que inician el procedimiento administrativo de ejecución y sólo en la medida que sea procedente el recurso de administrativo previsto en el artículo 127<sup>3</sup> del Código Fiscal de la Federación (precepto que es de similar contenido al artículo 171

---

<sup>3</sup> “**Artículo 127.** Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratase de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.”

Quater del código tributario local previamente transcrito), en esa medida será procedente el juicio contencioso administrativo.

Lo anterior así ha sido sostenido en la contradicción de tesis **197/2008-SS**, resuelta el día veintiocho de enero de dos mil nueve, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia **2a./J. 18/2009**, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, de marzo de dos mil nueve, página 451, registro 167665, que a continuación se transcribe:

12

**“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.** De acuerdo con el nuevo texto de la indicada disposición, en relación con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate se podrán impugnar sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los diez días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127. **Entonces, siendo improcedente el recurso de revocación en contra de dichas violaciones procesales, tampoco podrían adquirir el carácter de “actos o resoluciones definitivas”, a modo tal que en su contra no resulta procedente el juicio de nulidad. Esta es la regla general impuesta por el legislador en la norma reformada,** sin que pase por alto que en la misma disposición se establecieron como excepciones los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el recurso administrativo se podrá interponer a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que siendo impugnables estos actos del procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme con el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra será procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas.”

(Énfasis añadido)



Por lo anterior, se dice que el juicio de origen propuesto por el demandante en contra del, **1) mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; 2) acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 3) citatorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho**, emitidos y levantados por el titular de la Receptoría de Rentas de Centro de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, a través de las cuales, según se observa, se hizo exigible el cobro de una multa en cantidad total de **\$ 940.28 (novecientos cuarenta pesos 28/100 m.n.)** por incumplimiento a lo ordenado en el proveído de diecisiete de agosto y quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco en el juicio \*\*\*\*\*<sup>4</sup>; **resulta improcedente** porque se trata de una actuación que, según lo antes analizado, **todavía no adquiere el carácter de ser un acto definitivo**, ya que se tratan de actos que iniciaron el procedimiento administrativo de ejecución, requirieron de pago y realización de embargo, y es solo hasta que se publique la convocatoria a remate que dichos actos combatidos adquirirán el carácter de definitividad y, podrán impugnarse ya sea a través del recurso administrativo procedente (en el caso, el de revocación previsto en el artículo 171 Quater del Código Fiscal del Estado de Tabasco), o bien, del juicio contencioso administrativo.

13

En este sentido, es conveniente destacar que si bien de manera excepcional, los actos del procedimiento administrativo de ejecución pueden ser impugnables sin tener que esperar a la convocatoria a primera almoneda cuando se traten de actos de ejecución **sobre bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material**; lo cierto es que, **se insiste**, en el caso a estudio, dicho supuesto de excepcionalidad no se actualizan, pues si bien a través de uno de los actos **2) el acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho**, levantada por el notificador ejecutor adscrito de la Receptoría de Rentas de Nacajuca (folios 09 a 13 del expediente de origen) se advierte se embargó un \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*; lo cierto es que **la actora no**

<sup>4</sup> Folio 6 al 8 del expediente principal 472/2019-S-4.

manifestó en su escrito de demanda que dicho bien sea de los calificados como legalmente inembargables, o bien, que dicho embargo sea un acto de imposible reparación material, de ahí que se refiere que no es el momento procesal oportuno para combatir tales actuaciones, de conformidad con el artículo 171 Quater del Código Fiscal del Estado de Tabasco.

Se invoca de sustento a lo anterior, interpretada a *contrario sensu*, la tesis **VIII.2o.P.A.91 A**, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, de abril de dos mil diez, página 2795, registro 164719, que es del contenido siguiente:

14

**“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. LOS ACTOS GENERADOS POR LA VIOLACIÓN COMETIDA DURANTE SU DESARROLLO Y LOS EFECTOS QUE PRODUCEN SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR ENDE, IMPUGNABLES CONFORME A LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL PERJUICIO QUE CAUSAN AL GOBERNADO NO PUEDE SER SUBSANADO POR LA AUTORIDAD AL REMATARSE LOS BIENES EMBARGADOS.** De acuerdo con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, publicada en la página 451, Tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.", las violaciones cometidas antes del remate en el procedimiento administrativo de ejecución, por regla general, podrán impugnarse a través del recurso de revocación o del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguientes a tal evento, con excepción de los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el medio de impugnación podrá interponerse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo. Ahora bien, atendiendo a los fines del procedimiento

administrativo de ejecución, los actos generados por la violación cometida durante su desarrollo y los efectos que producen son de imposible reparación y, por ende, impugnables mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo conforme a la señalada hipótesis de excepción, prevista en el artículo 127, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando el perjuicio que causan al gobernado no puede subsanarse por la autoridad al rematarse los bienes embargados, como podría ser, por ejemplo, porque no se siga el procedimiento hasta el punto del remate de los bienes embargados; cuando el embargo recaiga respecto de una negociación a través de la intervención con cargo a la caja y se cubran los créditos al fisco federal a través del retiro de los ingresos diarios de la negociación intervenida; se trate de una intervención a la administración sin llegar a la venta de la negociación, o bien, porque los bienes embargados se enajenen fuera de remate y, en general, aquellos actos que tengan como efectos jurídico-materiales el impacto severo a las actividades y a la libre disposición de la administración y patrimonio de la negociación, que le impidan continuar con sus actividades normalmente.”

Por otro lado, son **infundados** sus argumentos, pues contrario a su dicho, del análisis directo realizado al escrito de demanda, visible en autos del expediente de origen a folios 1 a 5, no se advierte que la accionante haya impugnado la medida de apremio (multa) impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, pues como se refirió con anterioridad, la actora sólo impugnó los actos que, en síntesis, consisten en: **1) mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; 2) acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 3) citatorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.**

15

Sin embargo, aun en el supuesto sin conceder que la pretensión de la demandante además fuera combatir la multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por incumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha diecisiete de agosto y quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el diverso expediente laboral \*\*\*\*\*, cuya ejecución se realizó a través de los actos antes detallados, en términos del artículo 157 antes transcrito, aplicado a *contrario sensu*, en relación con el diverso 40, fracción XII, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dicha multa (jurisdiccional) no encuadra en ninguna de las hipótesis de

competencia de este tribunal previstas en el precepto legal citado en primer término, pues es evidente que ninguna de las fracciones ahí contenidas contempla la procedencia del juicio en contra de multas impuestas por otros órganos materialmente jurisdiccionales, tal como lo es el tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, es decir, este tribunal es competente para conocer sobre la impugnación de multas de carácter jurisdiccional.

16

Lo anterior sin soslayar que la fracción V del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevé que este tribunal está dotado de competencia para conocer de juicios que se promuevan en contra de multas por infracción a las normas administrativas locales o municipales; sin embargo, se insiste, en todo caso, la impugnación que pudiera pretender la actora es sobre una multa impuesta por un órgano materialmente jurisdiccional, pues de la lectura que al efecto se realice al mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo (visible a folios 6 al 8 del expediente principal), se aprecia que el concepto por el cual fue impuesta la multa es el siguiente: **“POR INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEIDO (sic) DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO Y QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE”** y la autoridad que determino la multa es **“TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO”**, siendo que la determinación del órgano jurisdiccional obedece al incumplimiento a lo ordenado por éste, por lo tanto, se colige que la citada multa no se emite por el incumplimiento a una norma administrativa de carácter local o municipal y, en consecuencia, es claro que en este aspecto, no se actualiza la competencia de este tribunal para conocer de una multa materialmente jurisdiccional a través del juicio contencioso administrativo.

A mayor abundamiento, es de señalarse que no existe sustento jurídico para que este tribunal examine la legalidad de los actos emitidos por un distinto órgano jurisdiccional con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, como en el caso lo es, la multa emitida por Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, pues para ello existen otros medios de defensa, ya sea en el proceso o fuera de él, a través de los cuales pueden someterse a escrutinio las actuaciones del juzgador emisor del acto en comento.



A lo anterior resulta aplicable, como criterio orientador y por *analogía*, lo sostenido en la tesis **II-TASR-III-773**, visible en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, segunda época, año VIII, número 86, febrero de mil novecientos ochenta y siete, de rubro y texto siguientes:

**“MULTAS DE APREMIO IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.- INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION PARA CONOCER DE ELLAS.-** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, se observa que las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son inapelables, por lo que las multas de apremio impuestas por dicho Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones deben considerarse con ese carácter, y la única vía que tiene el particular para impugnarlas será el amparo indirecto, tal como se previene en la parte final del artículo 42 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consiguientemente este Tribunal Fiscal de la Federación carece de competencia para conocer de dichas resoluciones. (III)”

17

(Énfasis añadido)

De igual forma, sirve de apoyo como criterio orientador y por *analogía*, lo dispuesto en la tesis **IV-TASR-XXI-237**, visible en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, cuarta época, año II, número 17, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página 393, que a continuación se cita: **1) mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; 2) acta de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 3) citatorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho**, emitidos y levantados por el titular de la Receptoría de Rentas de Nacajuca, Tabasco y por el notificador ejecutor adscrito a dicha dependencia, respectivamente, actuaciones a través de las cuales, según se observa, se hizo exigible el cobro de una multa en cantidad de \$940.28 (novecientos cuarenta pesos 28/100 M.N ), por incumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el diverso juicio \*\*\*\*\*; así como, en todo caso, tampoco

es procedente la impugnación ante este tribunal de la multa impuesta por ese órgano jurisdiccional, de conformidad con los argumentos jurídicos expuestos en párrafos anteriores.

En ese tenor, se estima que la decisión alcanzada por este órgano jurisdiccional a través del presente fallo, no implica una violación al principio *pro homine o pro persona*, previsto en el artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de la forma que favorezca más ampliamente a las personas.

18

Ello es así, pues por una parte, no se pueden soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, y siendo que la procedencia de la vía es una cuestión de orden público, este juzgador tiene la obligación de analizarlas aun de oficio, y, por otro lado, porque a parte actora del juicio contencioso administrativo de origen, ahora recurrente con la improcedencia que se determina, tiene a salvo sus derechos, para que, si así lo decide, llegando el momento procedimental oportuno –convocatoria a remate-, pueda acudir nuevamente ante este tribunal –o incluso en sede administrativa a través del recurso administrativo de revocación-, a impugnar los actos del procedimiento administrativo de ejecución antes descritos, pues hasta ese momento adquirirán el carácter de definitividad.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis de jurisprudencia **2a./J. 98/2014 (10a.)** y **2a./J.56/2014**, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomos I y II, octubre y mayo de dos mil catorce, registros 2007621 y 2006485, páginas 909 y 772, respectivamente, que son del rubro y contenido siguiente:

**“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.** Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que **tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.**

**“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.** Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, **sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.**”

(Énfasis añadido)

También tiene aplicación a lo anterior, la tesis **III.4o.T.2K (10ª)**, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo IV, enero de dos mil catorce, registro 2005342, página 3072, que es del rubro y contenido siguiente:

**“INCONFORMIDAD. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SU PRESENTACIÓN SE SUJETA A LOS PLAZOS**

20

**ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, POR LO QUE SI EL INCONFORME INCUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROCESAL DE SU OPORTUNIDAD, NO PUEDE NI DEBE SER MOTIVO DE ANÁLISIS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.** De conformidad con el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, a petición suya se enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, de otro modo, ésta se tendrá por consentida. De ello se infiere que la inconformidad debe presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente pues, de no ser así se tendrá por consentida y el Tribunal Colegiado de Circuito estará impedido para analizarla de fondo, por actualizarse la extemporaneidad o inoportunidad de su presentación; sin que al efecto pueda alegarse que el órgano revisor se encuentre compelido a examinar dicho recurso presentado fuera de tiempo, bajo el argumento de que debe cederse ante la preeminencia que adquiere el efecto reparador de la sentencia tutelar de derechos fundamentales, ni tampoco por la aseveración de que al tratarse de una cuestión de orden público y a la luz del principio pro homine y la interpretación conforme, el tribunal deba entrar a su estudio, toda vez que la inconformidad no puede ni debe ser motivo de análisis por el órgano jurisdiccional colegiado, si el inconforme no cumple con el presupuesto procesal de la oportunidad, esto es así, en razón de que la aplicación del citado principio y de la interpretación conforme, **no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas, ya que no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes**, al no respetarse los plazos establecidos por el legislador.”

(Énfasis añadido)

Igualmente, es de señalarse que el criterio anterior ya fue sostenido en las sentencias dictadas, entre otras, en los tocas de reclamación **176/2018-P3, 178/2018-P-3, 182/2018-P-3, AP-021/2018-P-3, 193/2019-P-2, 199/2019-P-2, 243/2019-P-2, 212/2019-P-2**, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por los Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Superior, en las sesiones **VIII, XI, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLV y XLVII, celebradas los**

días veinte de febrero, trece de marzo, doce de septiembre, dos, nueve, dieciséis y veintitrés de octubre, seis de noviembre, veintiocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente.

Finalmente, en cuanto al argumento de la actora en el sentido que el acto impugnado se ejecutó sin atender las formalidades esenciales del procedimiento que prevé al efecto la ley de la materia, esto en los términos de la demanda, y que tiene como consecuencia, la afectación en el patrimonio de la actora, sin mediar mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, por lo cual, en atención al derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto por el numeral 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se debe declarar la nulidad de dicho acto; es de calificarse como inoperante, toda vez que tales argumentos no van encausados a controvertir los fundamentos y motivos del acuerdo recurrido, sino en todo caso, el fondo del asunto, cuestión que no se puede estudiar, al haberse actualizado la improcedencia del juicio de origen.

21

Resulta aplicable al caso, por *analogía* y como criterio orientador, la tesis **VI-P-SS-425**, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, visible en la revista que edita dicho órgano jurisdiccional, sexta época, año IV, número 37, enero de dos mil once, página 56, cuyo contenido es el siguiente:

**“AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA ACTORA SI NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.-** Los conceptos de anulación hechos valer por la parte actora, en su escrito de demanda, resultan inoperantes si no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, teniendo como consecuencia el reconocimiento de la validez de la resolución.”

(Énfasis añadido)

Así, ante lo **infundado** por insuficientes e **inoperantes** de los argumentos que quedaron analizados, es procedente **confirmar** el auto de fecha **diez de septiembre de dos mil diecinueve**, a través del cual

se declaró el sobreseimiento del juicio por improcedente, dictado por la **Cuarta** Sala Unitaria de este tribunal en el expediente **175/2019-S-4**.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 fracción III, 110 fracción I, y 171 fracción XXII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, es de resolverse y se:

## R E S U E L V E

**PRIMERO.** Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es **competente** para resolver el presente recurso de reclamación.

**SEGUNDO.** Resultó **procedente** el recurso de reclamación propuesto.

22

**TERCERO.** Son, por una parte, **infundados** por insuficientes y, por otra, **inoperantes**, los agravios planteados por la parte recurrente; en consecuencia,

**CUARTO.** Se **confirma el auto de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve**, a través del cual se declaró el sobreseimiento del juicio dictado en el expediente **175/2019-S-4**, conforme a lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia.

**QUINTO.** Una vez que quede firme el presente fallo, con **copia certificada** del mismo, notifíquese a la **Cuarta Sala Unitaria** de este Tribunal, con remisión de los autos del toca **REC-298/2019-P-2** y del juicio **175/2019-S-4**, para su conocimiento y, en su caso, ejecución.

Notifíquese a las partes la presente resolución de conformidad con los artículos 17 y 18, fracción XIII, 21 y 24 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vigente y al quedar firme la misma, archívese el presente toca como asunto concluido.- **Cúmplase.**

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS **MAGISTRADOS**



**JORGE ABDO FRANCIS** COMO PRESIDENTE, **RURICO DOMÍNGUEZ MAYO** COMO PONENTE Y **DENISSE JUÁREZ HERRERA**, QUIENES FIRMAN EN UNIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, **BEATRIZ MARGARITA VERA AGUAYO**, QUIEN CERTIFICA Y DA FE.

**DR. JORGE ABDO FRANCIS**

Magistrado Presidente, y titular de la Primera Ponencia.

**MTRO. RURICO DOMÍNGUEZ MAYO**

Magistrado titular y ponente de la Segunda Ponencia

**23**

**M. EN D. DENISSE JUÁREZ HERRERA**

Magistrada titular de la Tercera Ponencia

**LIC. BEATRIZ MARGARITA VERA AGUAYO**

Secretaria General de Acuerdos

Que las presentes firmas corresponden a la resolución del Toca del Recurso de Reclamación **REC-298/2019-P-2**, misma que fue aprobada en la sesión de Pleno celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte.

*“...De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3 fracción VIII y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas; 3 y 8 de los Lineamientos*

*de la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos, del Estado de Tabasco y el acuerdo TJA-CT-004/2020, DEL Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se indica que fueron suprimidos del documento, datos personales de personas físicas, como el de las personas Jurídico Colectivas, por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos...”*